

ACERCA DE ESTE INFORME

Objetivo

Este informe ofrece un panorama general de las principales crisis humanitarias derivadas del conflicto armado en 3 de los 32 departamentos de Colombia. El objetivo es identificar los departamentos en los que podrían aumentar las consecuencias humanitarias del conflicto ante los desiguales avances en las negociaciones del Gobierno colombiano con los distintos grupos armados. Su objetivo es servir de base para la toma de decisiones y la programación humanitaria al anticipar las necesidades humanitarias en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Chocó.

Metodología

Este informe se basa en la revisión de datos secundarios de fuentes públicas. Para cada departamento seleccionado, el equipo de ACAPS recopiló la información existente, trazó un mapa de los causantes relevantes de las crisis, destacó los últimos acontecimientos y anticipó su posible evolución e impacto en las necesidades humanitarias durante los próximos meses.

Los tres departamentos se identificaron con base en dos criterios.

- El número total de personas afectadas por sucesos relacionados con el conflicto armado entre enero y junio de 2023: el equipo de ACAPS utilizó el Monitor de la Situación Humanitaria de OCHA para este criterio con el fin de identificar los departamentos con el mayor número de personas afectadas por conflictos.
- La presencia de varios grupos armados en los departamentos: como se explica en detalle más adelante, cuando uno de los grupos armados presentes en el departamento no participa en las negociaciones con el Estado, aumenta la probabilidad de que se incremente la violencia. Esto sucede porque el cese al fuego entre el Gobierno y otros grupos armados deja margen para que el grupo intente obtener un mayor control territorial. Para este criterio, el equipo de ACAPS se basó en información triangulada de un sistema de alertas de la Defensoría del Pueblo de Colombia (Delegada para Prevención de riesgos y Sistema de Alertas Tempranas) y en análisis de La Liga Contra el Silencio (El mapa de las guerras que desangran a Colombia) y Verdad Abierta (Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego).

Ámbito de aplicación

Este informe pretende poner de relieve las crisis actuales y previstas cuyas repercusiones humanitarias ya son visibles y que probablemente tendrán mayor importancia durante la segunda mitad del 2023. No pretende ofrecer una lista exhaustiva de todas las crisis actuales y previstas derivadas del conflicto armado que afectan a Colombia. Las crisis se seleccionaron con base en una revisión de la información pública disponible, el seguimiento detallado de la situación y el conocimiento del contexto. Las crisis del informe se enumeran por orden alfabético y no por orden de importancia o probabilidad.

Limitaciones

El contexto de violencia en Colombia cambia constantemente, más aún cuando el Gobierno está en proceso de negociación con múltiples grupos armados al mismo tiempo. Un cambio repentino en cualquiera de las variables consideradas podría producir resultados muy diferentes de los aquí presentados. Este informe pretende comprender las posibilidades futuras de deterioro del conflicto armado si las condiciones actuales no cambian de manera significativa. Nuevas condiciones alterarían los supuestos y podrían implicar un análisis diferente. Al mismo tiempo, debido a los altos niveles de violencia contra los civiles en el conflicto armado colombiano, ellos tienden a retener u ocultar una cantidad importante de información para evitar represalias por parte de los grupos armados. La limitada información disponible públicamente restringe el análisis, y puede haber dinámicas más localizadas que no se hayan tenido en cuenta en el informe.

TABLA DE CONTENIDOS

Contexto general y panorama de la situación humanitaria.....	2
Grupos armados implicados y cese al fuego	2
Próximas elecciones	3
Panorama humanitario	3
Crisis a tener en cuenta 1: Antioquia	6
Crisis a tener en cuenta 2: Caquetá.....	10
Crisis a tener en cuenta 3: Chocó	15

CONTEXTO GENERAL Y PANORAMA DE LA SITUACIÓN HUMANITARIA

Grupos armados implicados y cese al fuego

Desde su llegada al poder en agosto de 2022, el actual Gobierno colombiano ha emprendido una serie de negociaciones con varios de los grupos armados activos en el país. El objetivo es alcanzar un acuerdo que conduzca a la desmovilización de estos grupos armados. El Gobierno ha bautizado esta política como «Paz Total» (FP 08/11/2022).

Estas negociaciones avanzan a ritmos diferentes. A 13 de julio de 2023, había dos mesas de negociación: una con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otra (anunciada pero aún no iniciada) con el Estado Mayor Central (EMC).

Con los demás grupos armados, el Gobierno tiene previsto poner en marcha procesos de sometimiento. Esto significa que en lugar de negociar con ellos, el Gobierno les pondrá condiciones para que entreguen las armas a cambio de ciertos incentivos y beneficios (El Tiempo 10/05/2023).

Tras varios ataques del ELN contra las fuerzas de seguridad, las negociaciones con el ELN concluyeron con un acuerdo de cese al fuego que entrará en vigor el 3 de agosto (BBC 09/06/2023; Infobae 06/07/2023). Este cese al fuego no incluye el fin de las acciones armadas contra otros grupos armados no estatales (Semana 05/07/2023).

El Gobierno firmó un cese al fuego con el EMC a principios de 2023, pero lo suspendió el 22 de mayo después de que el grupo cometiera una masacre contra cuatro menores que intentaron escapar del reclutamiento forzoso (Cambio 22/05/2023).

Grupos armados mencionados en el informe

El Estado Mayor Central es una aglutinación de varios grupos de disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) (El País 16/04/2023 and 12/06/2023). Aunque estos disidentes afirman estar articulados en una organización unificada, su nivel de cohesión y su estructura de mando siguen estando en entredicho (CORE 2021; Johnson 05/06/2023; Razón Pública 26/03/2023). Junto con el actual líder 'Ivan Mordisco', alias 'Gentil Duarte' lideró esta disidencia hasta su muerte (InSight Crime 16/02/2023). Este informe se refiere a los grupos disidentes de las FARC-EP que han admitido públicamente pertenecer al EMC a 13 de julio de 2023 con su nombre o de manera directa como el EMC. Sin embargo, los grupos que pertenecen o no al EMC pueden cambiar con el tiempo.

La Segunda Marquetalia, junto con el EMC, es la segunda de las dos aglutinaciones de grupos disidentes de las FARC-EP en Colombia (CORE 2021). Este grupo armado nació en 2019, cuando algunos excomandantes de las FARC-EP, como alias 'Iván Márquez', 'Jesús Santrich', 'Romaña' y 'El Paisa' anunciaron que se rearmaban (El País 21/04/2023; EE 07/07/2023). Este informe se refiere a los grupos disidentes de las FARC-EP que han admitido públicamente pertenecer a Segunda Marquetalia a 13 de julio de 2023 con su nombre o de manera directa como Segunda Marquetalia. Sin embargo, los grupos que pertenecen o no a la Segunda Marquetalia pueden cambiar con el tiempo.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) nacieron tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Gobierno colombiano los llama Clan del Golfo por su origen y fuerte presencia en el Golfo de Urabá. Antes, el Gobierno colombiano los llamaba Los Urabeños y Clan Úsuga (Badillo y Mijares 16/01/2022).

El Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) también conocido como Los del Bajo, Los Caparros y antes como Los Caparrapos. Este grupo armado es una facción disidente de la AGC. Aunque este grupo funcionó como una estructura independiente durante algunos años, en 2009 pasó a formar parte de la AGC y se convirtió en el BVPA. A principios de 2017, se separaron de las AGC y empezaron a combatirlos en los departamentos de Antioquia y Córdoba (InSight Crime 02/06/2021; El Colombiano consultado el 14/07/2023). Recientemente, han estado usando el nombre Los del Bajo en referencia a la subregión del Bajo Cauca en Antioquia (Caracol Radio 06/09/2022).

Comandos de la Frontera - Ejército Bolivariano también conocidos como La Mafia, nombre que tenían antes de cambiarlo entre 2019–2020. Este grupo nació como una alianza entre disidentes de los Frentes 48 y 32 de las FARC-EP y otro grupo conocido como La Constru, que surgió tras la desmovilización del grupo paramilitar AUC (InSight Crime 11/06/2022; EE 12/09/2020). En 2021, anunciaron su incorporación a la Segunda Marquetalia (Defensoría del Pueblo de Colombia 04/01/2019; Defensoría del Pueblo de Colombia 03/07/2020; Análisis Urbano 15/03/2021). Este informe se refiere a ellos como Comandos de la Frontera o Segunda Marquetalia en la sección sobre Caquetá.

Frente Carolina Ramírez forma parte del EMC (Cerosetenta 02/05/2023). Antes se les conocía como Frente Armando Ríos o Frente Primero. Sus principales áreas de influencia son los departamentos de Guainía, Guaviare y Putumayo. Este frente se declaró en disidencia en 2016, antes de la firma del acuerdo entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP (InSight Crime 13/07/2019; Semana 23/05/2023). Este informe se refiere al grupo como Frente Carolina Ramírez o el EMC en la sección sobre Caquetá.

El Ejército de Liberación Nacional es un grupo armado que nació en la década de 1960. El ELN está presente en más de 200 municipios de Colombia (Defensoría del Pueblo de Colombia 09/12/2022).

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue un grupo armado que nació en la década de 1960. Era el mayor grupo insurgente del país. Se desmovilizó en 2016 en el marco de un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano (Verdad Abierta 18/11/2012; InSight Crime 16/11/2011; France 24 25/11/2021).

Las Autodefensas Unidas de Colombia eran el mayor grupo paramilitar de Colombia. Nacieron hacia 1997 como unión de varios grupos de autodefensa. Las AUC se desmovilizaron entre 2003-2006 tras un acuerdo de desmovilización con el Gobierno colombiano (InSight Crime 25/05/2011).

Descargo de responsabilidad: al utilizar estos nombres, ACAPS no está aceptando la legitimidad de ningún grupo armado ni su condición de grupo armado con objetivos políticos o no políticos. Utiliza los nombres que los grupos se han dado a sí mismos como forma de estandarizar sus nombres.

Próximas elecciones

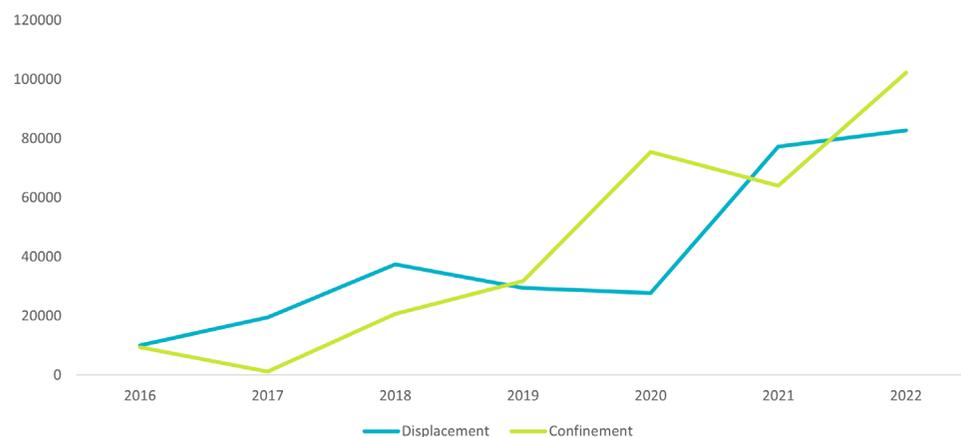
En octubre de 2023, Colombia celebrará sus elecciones regionales para elegir alcaldes, miembros de los consejos municipales, gobernadores y miembros de las asambleas departamentales. Varias entidades gubernamentales y no gubernamentales han advertido sobre la infiltración de grupos armados en el proceso de registro de candidatos en zonas donde estos grupos tienen presencia permanente (MOE 27/06/2023; Asuntos Legales 17/04/2023). Los grupos armados pueden perturbar las elecciones mediante la violencia contra los líderes políticos y sociales (MOE/NIMD 24/03/2021). Este informe hace énfasis en las subregiones en las que este riesgo podría materializarse entre julio y diciembre de 2023.

Panorama humanitario

A medida que continúan las negociaciones, también lo hacen las consecuencias humanitarias del conflicto armado. En 2022 ocurrió el mayor número de desplazamientos y confinamientos¹ desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 (OCHA 23/01/2023). Durante los seis primeros meses de 2023, más de 26 000 personas se vieron obligadas a desplazarse y 27 000 fueron confinadas en todo el país (OCHA, consultado el 17/07/2023). Aunque estas cifras son inferiores a las registradas durante los mismos meses en 2021 y 2022, son superiores a la tendencia registrada entre 2019–2020 (OCHA consultado el 17/07/2023).

¹ Los confinamientos se definen como la limitación de la movilidad de una comunidad y del acceso de la población a al menos tres servicios o bienes básicos (como alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, y medios de subsistencia) durante al menos una semana. Situaciones similares con una duración inferior a una semana se consideran simplemente restricciones de movilidad (OCHA 04/2015). Este informe de ACAPS explica las diferencias en las definiciones de confinamiento y el impacto humanitario del confinamiento en Colombia.

Figura 1. Personas desplazadas y confinadas por sucesos relacionados con el conflicto armado en Colombia (2016-2023)



Fuente: ACAPS con datos de OCHA (consultado el 05/07/2023); OCHA (consultado el 05/07/2023)

Otros sucesos relacionados con el conflicto se han mantenido a niveles similares a los de años anteriores. A 30 de junio de 2023, los secuestros habían aumentado más de un 5% y los casos de reclutamiento forzoso se habían incrementado en más de un 153% en comparación con los mismos meses de 2022. Además, alrededor de 139 personas habían sido retenidas como rehenes, frente a sólo tres en 2022. En cambio, otros sucesos se han reducido considerablemente. Durante los seis primeros meses de 2023, el número de personas muertas en masacres disminuyó un 14%, el de afectados por restricciones al acceso humanitario un 79%, el de desplazados un 34% y el de personas confinadas un 57% (OCHA consultado el 15/06/2023; OCHA consultado el 05/07/2023). Este informe pretende dar cuenta de estas variaciones a nivel subregional, dado que estos sucesos no se producen con la misma frecuencia en cada departamento.

Con base en los dos criterios de selección mencionados, en el informe se identificaron tres departamentos: Antioquia, Caquetá y Chocó. En todos ellos ha habido un gran número de personas afectadas por conflictos armados y una mayor presencia de diversos grupos armados. Otros departamentos, como Bolívar, Nariño y Norte de Santander, se enfrentan a situaciones similares. El informe eligió los tres departamentos con mayor número de personas afectadas durante el periodo enero-junio de 2023 y con más grupos armados que se disputan el control territorial.

Tabla 1. Impacto del conflicto armado en Colombia (entre enero y junio de 2016-2023)

	PERSONAS SECUESTRADAS	PERSONAS RECLUTADAS A LA FUERZA	PERSONAS ASESINADAS EN MASACRES	PERSONAS TOMADAS COMO REHENES	PERSONAS AFECTADAS POR RESTRICCIONES AL ACCESO HUMANITARIO	PERSONAS DESPLAZADAS	PERSONAS CONFINADAS	SUCESOS QUE RESTRINGEN EL ACCESO HUMANITARIO
2016	95	25	41	1	2 518 675	7058	8546	82
2017	72	46	10	7	29 176	10 145	306	90
2018	58	80	43	17	905 338	22 592	14 028	193
2019	95	25	41	5	315 412	12 785	13 710	95
2020	52	45	115	14	345 813	16 138	47 641	64
2021	101	66	119	0	53 172	41,255	32 558	73
2022	112	89	90	3	2 752 985	41 133	71 742	251
2023	118	226	77	139	568 927	26 838	27 117	144

Fuente: ACAPS con datos de OCHA (consultado el 15/06/2023); OCHA (consultado el 17/07/2023)

Map 1: Colombia



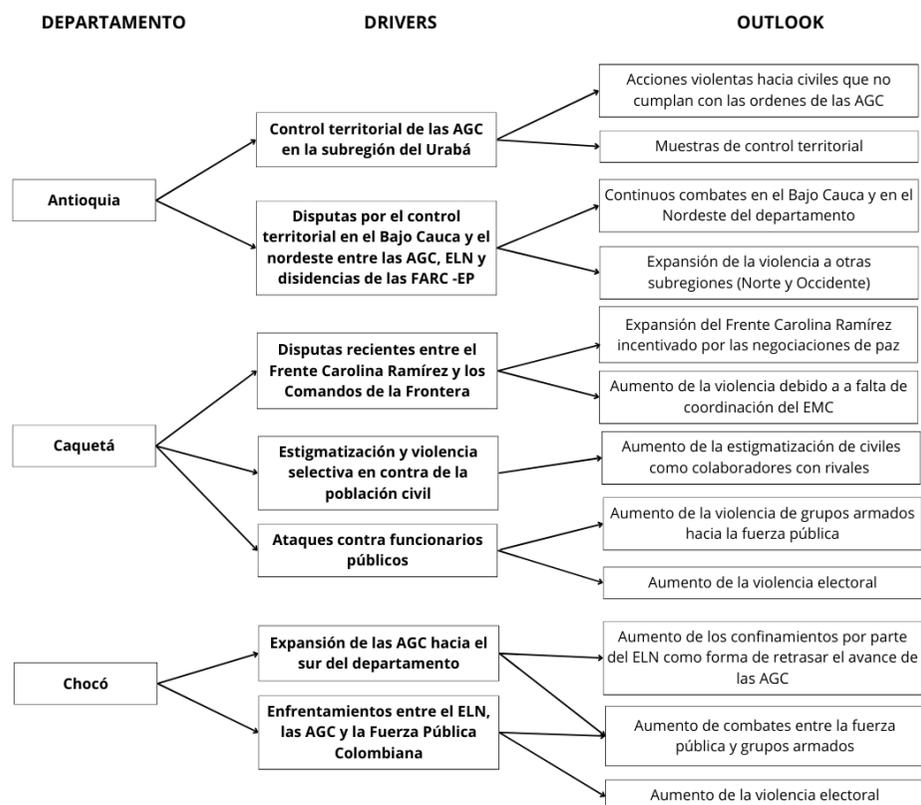
Tabla 2. Número de sucesos relacionados con conflicto armado, personas afectadas y grupos armados presentes en las crisis analizadas (a junio de 2023)

DEPARTAMENTO	PRINCIPALES SUBREGIONES AFECTADAS	PERSONAS AFECTADAS	SUCESOS	GRUPOS ARMADOS
Antioquia	Urabá Antioqueño y Bajo Cauca	487 435	127	AGC, ELN, disidencias de las FARC-EP (frentes 18 y 36) y Los Caparros
Caquetá	Caquetá	30 604	74	Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera
Chocó	Alto Atrato y Medio Atrato	24 242	117	AGC y ELN
Nariño	Pacífico Sur, Sanquianga y Telembí	23 053	110	Disidencias de las FARC-EP (Frente Oliver Sinisterra, adscrito a la Segunda Marquetalia, y Comando Coordinador de Occidente, adscrito al EMC)
Norte de Santander	Catatumbo	13 648	165	Disidencias del ELN, EPL, FARC-EP y AGC
Bolívar	Sur de Bolívar and Montes de María	7476	41	Disidencias del ELN, las AGC y las FARC-EP
Cauca	Pacífico, Norte, Sur y Macizo	4714	232	Disidencias de las FARC-EP (Columna Móvil Dagoberto Ramos, Frente Jaime Martínez y algunos grupos disidentes adscritos al Comando Coordinador de Occidente), el ELN y las AGC

Fuentes: ACAPS con datos de OCHA (consultado el 15/06/2023); OCHA (consultado el 17/07/2023); Cerosententa (14/12/2022); Verdad Abierta (11/06/2023)

Source: ACAPS using data from OCHA 04/04/2023

Figura 2. Principales causas y perspectivas de las crisis en Antioquia, Caquetá y Chocó.



Vea el gráfico a tamaño completo en la página 19

CRISIS A TENER EN CUENTA 1: ANTIOQUIA

Principales resultados

A lo largo de la historia, Antioquia ha sido el departamento colombiano con más víctimas del conflicto armado. Conecta el sur de Bolívar y Córdoba, históricamente zonas cocaleras, con el golfo de Urabá, punto de salida hacia el océano Atlántico. Además de los años de apropiación de tierras y la presencia de diversos grupos armados, esta ubicación explica la proporción de víctimas del conflicto armado en el departamento.

Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, las AGC se han convertido en el grupo armado más importante de Urabá. En otras subregiones (como Bajo Cauca y Nordeste), varios grupos armados, entre ellos las AGC, Los Caparros, el ELN y disidentes de las FARC-EP, luchan por el control territorial. De cara a las negociaciones de Paz Total, el hecho de que sólo el ELN tenga un cese al fuego y las AGC estén siendo excluidas de las negociaciones produce riesgos diferentes para cada subregión.

En Urabá, el principal riesgo es que las AGC incrementen sus actividades, como los paros armados y la violencia selectiva contra la población civil, para presionar al Gobierno a negociar con ellas. Esto podría perturbar los medios de subsistencia de la población civil y aumentar las restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.

En Bajo Cauca y Nordeste, el riesgo es que las AGC aprovechen el cese al fuego del ELN para continuar su expansión territorial. En relación con esto, el ELN y el EMC han construido una alianza para enfrentarse a las AGC, lo que significa que no hay intenciones de reducir la violencia. La persistencia de los combates podría seguir provocando confinamientos y desplazamientos, y fomentando el reclutamiento forzoso, que ya va en aumento.

Por último, los combates podrían extenderse a subregiones como Norte y Occidente, aumentando el desplazamiento y el confinamiento, pues las AGC parecen tener planes de expandirse por el norte de Antioquia para conectar Urabá y Nordeste.

Antioquia es el departamento más poblado de Colombia. El 20% de la población vive en zonas rurales, donde se concentran la mayoría de los sucesos relacionados con el conflicto armado (TerriData consultado el 10/07/2023). El 12% vive de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura o la pesca (DANE 12/2020). Muchas de estas actividades se llevan a cabo en zonas rurales, lo que las pone en riesgo de interrupción en caso de aumento de la violencia por conflictos armados (NRC 26/06/2023).

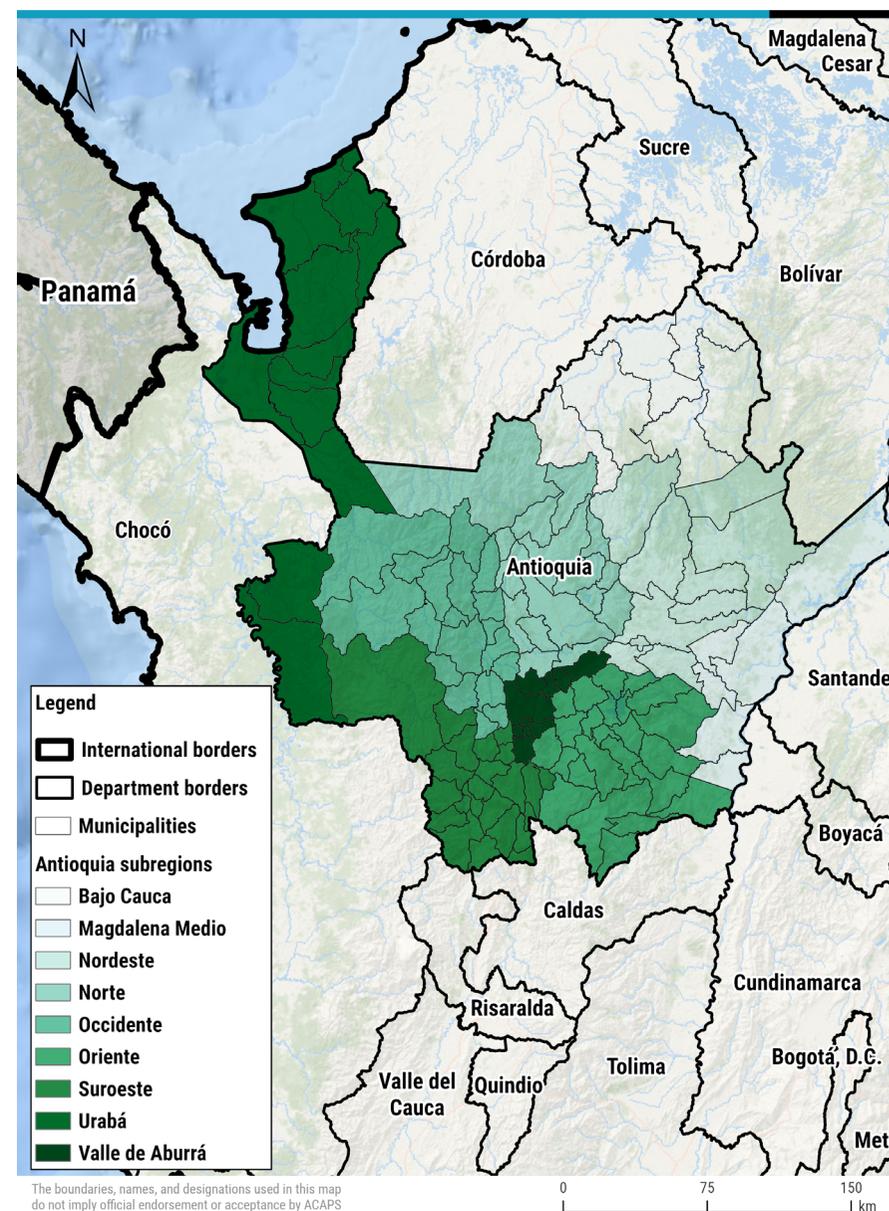
Información básica

INDICADOR	ANTIOQUIA	COLOMBIA
Población	6,9 millones	51,52 millones
% de la población que vive en zonas rurales	19,67%	23%
Cobertura eléctrica rural	95,92%	86%
Cobertura de agua potable rural	52,53%	37%
Cobertura de alcantarillado rural	38,63%	16%
Tasa de mortalidad infantil de niños menores de cinco años por cada 1000 nacidos vivos	11	15,02
Tasa de extorsión por cada 100 000 habitantes	17,36	9,5
Tasa de homicidios en zonas rurales por cada 100 000 habitantes	76,19	36
Origen étnico	Indígena: 37 628 (0,6%) Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera: 360 000 (5,22%)	Indígena: 1 905 617 (4,4%) Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera: 2 937 224 (6,76%)
Pobreza en las zonas rurales	36,8%	39,9%
% de personas que viven de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca	12,85%	21,92%
% de la población que se enfrenta a la inseguridad alimentaria	24,6%	30%
Tasa de desempleo	10,1%	10,5%

Fuentes: DANE (12/07/2019, 12/2020, 05/04/2023, y 05/2023); TerriData (consultado el 10/07/2023); CTPA et al. (consultado el 10/07/2023); PMA (15/02/2023); LR (10/03/2023); Gobierno de Colombia (12/2021); Dejusticia (28/02/2023); Medicina Legal (2022); Contraloría General de la República (consultado el 19/07/2023); Asi Vamos en Salud (consultado el 17/07/2023)

En Antioquia, más de 37 000 personas se identifican como indígenas, y alrededor del 27% de la población indígena ha sido víctima del conflicto armado. Alrededor de 360 000 personas se consideran negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. La mayoría de estas poblaciones se ubican en Urabá y Bajo Cauca, subregiones particularmente afectadas por el conflicto armado y con mayores niveles de pobreza, desempleo e inseguridad alimentaria (CTPA et al. consultado el 10/07/2023).

Map 2: Antioquia subregions



Source: ACAPS using data from OCHA 04/04/2023; FOLU accessed 26/07/2023

Contexto general

Históricamente, Antioquia, en el nororiente de Colombia, ha sido el departamento colombiano con mayor número de víctimas del conflicto armado. Entre 1958-2019, el 20% de las víctimas afectadas por el conflicto en toda Colombia se encontraban en Antioquia (Comisión de la Verdad consultado el 12/07/2023). Las razones del conflicto en Antioquia varían, desde la apropiación ilegal de tierras hasta el narcotráfico y la minería ilegal (Giraldo et al. 01/03/2011; Bonilla-Calle et al. 2022).

El conflicto armado afecta a todo el departamento, pero en especial a tres subregiones:

- **Urabá** comprende 11 municipios situados en el extremo norte y limita con el mar Caribe y Panamá. Esta subregión tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, lo que la hace útil para el transporte de narcóticos (Ballvé 08/11/2018; CNMH 20/09/2022).
- **El Bajo Cauca** comprende seis municipios del nororiente y limita con los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre y con la cordillera de Ayapel.
- **El Nordeste** comprende diez municipios del nororiente, limítrofes con el departamento de Bolívar y la Serranía de San Lucas, uno de los lugares de Colombia con más minas de oro. Además de tener municipios donde se cultiva coca, el Bajo Cauca y el Nordeste son útiles por sus conexiones con otras zonas de cultivo y procesamiento de clorhidrato de cocaína, así como territorios con importante minería ilegal (Comisión de la Verdad 19/11/2020).

Otras actividades, como la apropiación de tierras, también son comunes en Antioquia (Castilla and Gomez 01/05/2006; CTPA consultado el 16/06/2023).

Principales factores de la crisis y desarrollos recientes

Urabá:

Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, las AGC se convirtieron en el grupo armado dominante en Urabá. Por el contrario, en el resto de Antioquia (principalmente en el Bajo Cauca), varias organizaciones armadas, entre ellas las AGC, Los Caparros, el ELN y las disidencias de los Frentes 18 y 36 de las FARC-EP, siguen disputándose el control territorial.

Exclusión de las AGC de las negociaciones de la Paz Total:

En Urabá, el principal riesgo para la paz es que fracase el diálogo entre el Gobierno colombiano y las AGC. En junio de 2023, el Gobierno colombiano declaró que las AGC formarían parte de un proceso de sumisión en lugar de estar en la mesa de negociaciones. Esto significa que no podrán negociar ningún beneficio que el Gobierno les imponga a cambio de la desmovilización (El Colombiano 13/03/2023). Las AGC han declarado que no están dispuestos a aceptar la sumisión y exigen la oportunidad de negociar (DW 04/04/2023).

Cese al fuego fallido con las AGC:

A finales de diciembre de 2022, el Gobierno colombiano anunció un cese al fuego con las AGC. El 20 de marzo de 2023, el presidente puso fin a este cese al fuego en respuesta a las acusaciones de que las AGC incitaban a las protestas mineras en Antioquia (EE 23/03/2023; LA Times 20/03/2023). Lo que siguió fueron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad colombianas y las AGC, y el secuestro y asesinato de líderes sociales en Urabá (Caracol Radio 16/06/2023; El Colombiano 11/06/2023 y 12/06/2023).

Bajo Cauca y Nordeste

El principal riesgo en estas subregiones es la guerra entre el ELN, el EMC y las AGC por el control territorial. Las AGC intentan controlar estos municipios ya que conectan el departamento de Antioquia con la Serranía de San Lucas.

El cese al fuego sólo se limita a los enfrentamientos con el Estado colombiano

El ELN ha acordado un cese al fuego con el Gobierno colombiano, pero esto no limita al grupo a luchar contra sus rivales. En consecuencia, es probable que el cese al fuego solo reduzca los combates contra el ejército o la policía colombianos.

Los disidentes de los Frentes 18 y 36 de las FARC-EP afirman estar adscritos al EMC. Esto significa que el Gobierno no tiene actualmente ningún acuerdo de cese al fuego con ellos (Infobae 30/05/2023; EE 15/06/2023). Si tiene un acuerdo con el ELN, lo que significa que luchan juntos contra las AGC en la subregión del Bajo Cauca (Caracol Radio 13/02/2023). La consecuencia general es que, a pesar del cese al fuego entre el ELN y el Gobierno colombiano, hay pocas posibilidades de que se detenga la violencia entre los grupos armados en el Bajo Cauca.

Aumento de los enfrentamientos entre grupos armados y entre estos y el Estado

El elevado número de grupos armados presentes en Antioquia ha provocado tensiones con las fuerzas de seguridad. El 18 de abril de 2023, el ELN utilizó explosivos contra agentes de policía en Yondó e hirió a 13 policías (El Tiempo 18/04/2023; El Colombiano 18/04/2023). En febrero de 2023, disidentes del Frente 36 se tomaron una escuela en Yarumal (El Colombiano 02/02/2023). A principios de junio, disidentes de las FARC-EP se enfrentaron con la AGC en Ituango (Semana 05/06/2023). El ELN y las AGC también se han enfrentado en varios municipios (El Tiempo 18/05/2023; Infobae 22/03/2023). Entre principios de 2023 y el 15 de junio, se registraron 14 enfrentamientos entre grupos armados o entre fuerzas militares y grupos armados (OCHA consultado el 16/06/2023).

Impacto humanitario

En Antioquia, la violencia implica varios riesgos para la población civil.

Hechos violentos contra la población civil

se produjeron al menos 128 hechos de violencia en el departamento entre enero y junio de 2023. Más del 67% de ellos fueron ataques contra la población civil. Entre ellos, el más común fue el asesinato selectivo de civiles (43), seguido del secuestro (9) y las masacres (4) (OCHA, consultado el 16/06/2023).

Los motivos del asesinato o secuestro de civiles por parte de los grupos armados van desde la búsqueda de pagos de extorsión hasta el castigo por infringir las normas que los grupos armados han establecido dentro de las comunidades en las que están presentes (EE 12/06/2023; API 14/06/2023). Otros civiles que se convierten en blanco de la violencia son aquellos percibidos como aliados de grupos rivales (Steele 2017).

Desplazamiento:

Entre 2016 y 2022, los grupos armados desplazaron por la fuerza a más de 21 900 personas (OCHA, consultado el 14/07/2023). El desplazamiento en este departamento se debe principalmente a combates entre grupos armados o amenazas contra comunidades o individuos (El Tiempo 20/04/2023; El Colombiano 16/03/2023). A veces no es evidente que las personas son desplazadas forzosamente (El Colombiano 09/02/2023).

Las personas desplazadas de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba convergen en Medellín. La Gobernación de Antioquia ha declarado que está atendiendo a los desplazados, pero la situación ha desbordado su capacidad de respuesta debido al rápido aumento de desplazados que buscan refugio. Las necesidades prioritarias de la población desplazada incluyen alojamiento temporal, alimentos y asistencia sanitaria. Algunos refugios tampoco disponen de instalaciones sanitarias adecuadas (OCHA 20/06/2023). En febrero de 2023, un centenar de miembros de comunidades indígenas protestaron frente a la alcaldía de Medellín porque no recibieron asistencia suficiente tras su desplazamiento. Los manifestantes también expresaron su preocupación por la perturbación de sus medios de subsistencia y la pérdida de acceso al empleo (El País 22/02/2023).

Otro motor del desplazamiento es la violencia sexual cometida por los grupos armados, que explotan sexualmente a niñas, adolescentes y mujeres, principalmente en la subregión del Bajo Cauca. Los datos son escasos debido al miedo de las familias a denunciar, pero existen pruebas anecdóticas de que los grupos armados solicitan favores sexuales a cambio de dinero o bienes o mediante amenazas contra las víctimas y sus familias. La violencia sexual

ha afectado de manera particular a las mujeres migrantes venezolanas víctimas de las redes de trata de seres humanos, sobre todo en el municipio de Remedios. Los miembros de los grupos armados también suelen casar a las niñas a la fuerza o coaccionarlas para que queden embarazadas (OCHA 20/06/2023).

Restricciones al acceso humanitario

Entre enero y junio de 2023, hubo al menos 12 casos de uso de artefactos explosivos en Antioquia, incluyendo minas antipersona, trampas explosivas y municiones sin explotar. Estas y otras restricciones, como el bloqueo de carreteras y los puestos de control ilegales, han limitado el acceso humanitario a cerca de 485 000 personas en el departamento (OCHA consultado el 16/06/2023). En marzo de 2023, hombres no identificados quemaron dos ambulancias pertenecientes a una misión médica en Cauca (Caracol Radio 11/03/2023).

Reclutamiento forzado

Aunque se estima que el reclutamiento forzado está severamente subregistrado, es una de las repercusiones que se prevé que siga empeorando en el departamento dado el incremento de las disputas entre grupos armados (El Colombiano 08/06/2023). Según la Defensoría del Pueblo, entre comienzos de 2023 y mayo se presentaron al menos 34 casos de reclutamiento forzado de menores, más que todos los casos denunciados en 2022 (El Colombiano 26/05/2023). La Gobernación de Antioquia también denuncia al menos 45 casos de reclutamiento forzado de menores entre enero y abril de 2023 sólo en el departamento, lo que significa que las cifras reales en todo el país son probablemente mucho mayores (El Colombiano 08/06/2023). Los grupos armados esperan a los niños a la puerta de las escuelas u organizan fiestas para ofrecerles regalos o dinero en efectivo por unirse a su organización (Semana 05/05/2023). Los niños aumentan la capacidad de los grupos armados para hacer frente a sus competidores y son considerados más «leales» a sus causas que las personas mayores, lo que incentiva a los grupos armados a reclutarlos (ACAPS 31/03/2022).

Perspectivas

Violencia sostenida por incumplimiento de ceses al fuego y grupos armados excluidos

Las negociaciones entre el Gobierno y varios grupos armados influyen en el nivel de violencia en Antioquia. Si bien se espera que el cese al fuego con el ELN los motive a disminuir sus actos violentos, también podría ser una oportunidad para que los grupos armados que no participan en las negociaciones (por ejemplo, Los Caparros), o que no parecen estar dispuestos a aceptar las propuestas del Gobierno (por ejemplo, las AGC), extiendan su control territorial (Verdad Abierta 11/06/2023). El EMC, al que están adscritas las disidencias de las FARC-EP en Antioquia, tampoco tiene un cese al fuego activo con el Gobierno (El Nuevo Siglo 15/06/2023). A falta de un cese al fuego entre el Gobierno y otros grupos armados además del ELN, es poco probable que la violencia y sus repercusiones humanitarias se reduzcan de manera significativa. También será difícil verificar el cumplimiento del ELN.

Extensión de la violencia a otras subregiones

Las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste sirven de corredor funcional para el narcotráfico y la minería ilegal, lo que las sitúa en el centro de los enfrentamientos entre diferentes grupos armados (Rutas del Conflicto 02/10/2020). Otras subregiones, como Norte y Occidente, también pertenecen a este circuito. Según testimonios de civiles, el plan de las AGC es extender su presencia desde Urabá hasta Nordeste, pasando por las subregiones Norte y Occidente, para conectar todas sus zonas de influencia (EE 10/07/2023; Defensoría del Pueblo de Colombia 02/09/2022). Esto significa que la violencia en estas subregiones probablemente se extenderá en los próximos meses.

Continúan los combates en el Bajo Cauca y Nordeste

A menos que uno de los grupos armados logre establecer una autoridad completa o llegue a un acuerdo para compartir el territorio, los combates por el control territorial seguirán aumentando en los próximos meses. Esto se debe a que desde 2020, diferentes grupos armados se han expandido a otros municipios de Antioquia. Las AGC y las disidencias de las FARC-EP se han expandido a municipios como Angostura, Campamento, San Andrés de Cuerquía, Toledo y Yarumal (Defensoría del Pueblo de Colombia 24/01/2020, 11/06/2021 y 02/09/2022).

Desde el 29 de junio, en una zona rural del municipio de Segovia (subregión Nordeste), los tres grupos armados presentes en el territorio (ELN, AGC y EMC) se han enfrentado tras la llegada de las AGC, lo que ha provocado el desplazamiento de al menos 300 personas (El Colombiano 01/07/2023). Al 5 de julio, persistían los combates que mantenían confinadas a las comunidades (El Colombiano 05/07/2023). Al 10 de julio, no se había informado de

enfrentamientos, pero las familias desplazadas permanecían en municipios cercanos (Remedios y El Bagre) o en el centro urbano de Segovia. Los gobiernos locales han dicho que no disponen de recursos suficientes para responder a la crisis (EE 10/07/2023).

Violencia selectiva y muestras de control territorial en Urabá

En las zonas donde dominan las AGC, los riesgos son diferentes. Especialmente en Urabá, las AGC pueden utilizar su alto nivel de control territorial para presionar al Gobierno para que acceda a negociar. En el pasado, las AGC han utilizado paros armados para presionar al Gobierno. Estos paros, que llevan a cabo en respuesta a determinadas acciones del Gobierno colombiano, implican prohibiciones a la circulación de personas y mercancías, y cierres de mercados durante varios días en las zonas bajo su control (LSV 30/07/2022; Badillo and Trejos 2022). Los civiles que no obedezcan corren el riesgo de morir. La población también se enfrenta a una perturbación prolongada de sus medios de subsistencia (LSV 10/05/2022; CCEEU 2022). Si el Gobierno no incluye a la AGC en las negociaciones de paz, es probable que la violencia selectiva y las huelgas armadas aumenten en esta subregión.

CRISIS A TENER EN CUENTA 2: CAQUETÁ

Principales hallazgos

El departamento de Caquetá se enfrenta a **conflictos por la tierra**, la **deforestación legal e ilegal** y una **fuerte militarización** por parte del Estado colombiano. Actualmente, dos grupos armados contribuyen a la violencia en el departamento: Comandos de la Frontera (adscrito a la Segunda Marquetalia) y Frente Carolina Ramírez (adscrito al EMC). Las disputas entre estos dos grupos han aumentado en Caquetá desde mayo de 2023 como consecuencia de la expansión del EMC hacia la zona montañosa del departamento y las riberas del río Caquetá, que son las zonas más afectadas por la violencia.

El **principal impacto humanitario** de la violencia es que las fuerzas de seguridad y los dos grupos armados estigmatizan (y, en ocasiones, asesinan) a **campesinos, funcionarios públicos y civiles**, al decir que son colaboradores de sus rivales. Los grupos armados también han llevado a cabo actividades de control social, como censar a la población, establecer toques de queda e impedir el transporte entre pueblos después de ciertas horas.

Existen graves **restricciones al acceso humanitario** en Caquetá, incluidas amenazas al personal humanitario e interrupción de las comunicaciones por parte de grupos armados. También es de suponer que no se denuncian todos los sucesos por el miedo de las comunidades a las represalias.

Durante los próximos seis meses (julio-diciembre de 2023), existe el riesgo de que se mantengan los combates entre los grupos armados, lo que aumentaría la probabilidad de reclutamiento forzoso y las restricciones al acceso humanitario. También existe el riesgo de que se atente contra agentes del Estado, candidatos a cargos públicos y civiles presuntamente aliados de los rivales de los grupos armados.

Información básica

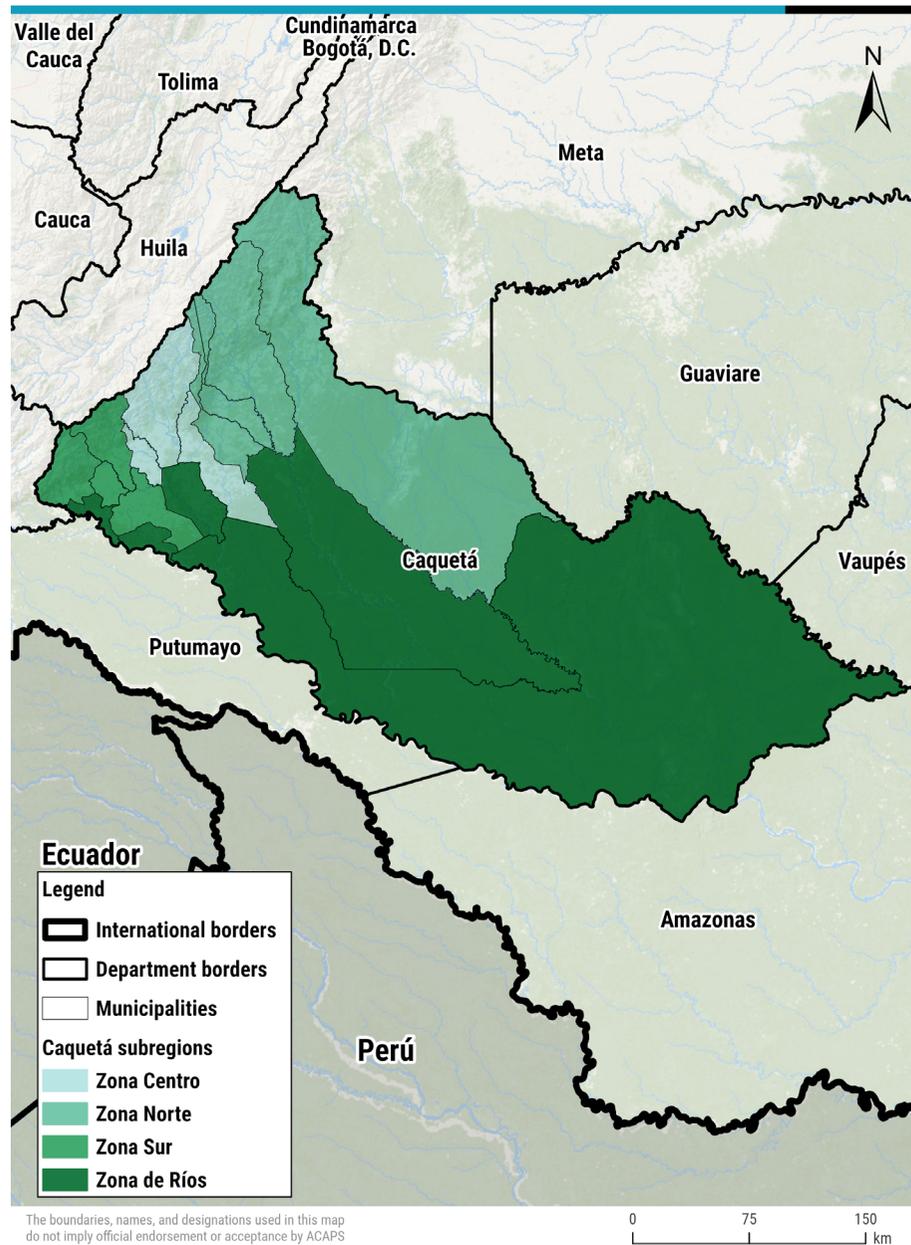
INDICADOR	CAQUETÁ	COLOMBIA
Población	423 857	51,52 millones
% de la población que vive en zonas rurales	34,25%	23%
Cobertura eléctrica rural	63,88%	86%
Cobertura de agua potable rural	56,34%	37%
Alcantarillado rural	7,31%	16%
Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos	10,1	15,02
Tasa de extorsión por 100 000 habitantes	14,37	9,5
Tasa de homicidios en zonas rurales por 100 000 habitantes	62,02	36
Origen étnico	Población negra y afrocolombiana: 11 661 (2,7%) Indígena: 5026 (1,18%)	Indígena: 1 905 617 (4,4%) Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera: 2 937 224 (6,76%)
Pobreza en las zonas rurales	25,6%	39,9%
% de personas que viven de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca	32,21%	21,92%
Tasa de desempleo	11,2	30%
		10,5%

Fuentes: DANE (12/07/2019, 12/2020, 05/04/2023, 23/05/2023, y 05/2023); TerriData (consultado el 10/07/2023); Fedesarrollo (12/2022); UNDP (consultado el 10/07/2023); LR (10/03/2023); Gobierno de Colombia (12/2021); Dejusticia (28/02/2023); Medicina Legal (2022); Contraloría General de la República (consultado el 19/07/2023); Así Vamos en Salud (consultado el 12/07/2023)

En Caquetá, más de un tercio de la población vive en zonas rurales, y más o menos la misma cantidad vive de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca (TerriData consultado el 10/07/2023; DANE 12/2020). El acceso a los servicios públicos en las zonas rurales es especialmente bajo: poco más del 50% de la población rural tiene acceso a agua potable y menos del 10% a alcantarillado (TerriData consultado el 10/07/2023). Alrededor del 3% de la población de Caquetá se identifica como negra, afrocolombiana o indígena (PNUD consultado el 10/07/2023).

La gran parte de la población que se dedica a la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca en este departamento es también una de las principales fuentes de tensión en el conflicto armado (CNMH consultado el 17/07/2023). Entre 2020-2021, Caquetá fue el tercer departamento de Colombia donde más aumentaron los cultivos de coca (78,5%) (Ministerio de Justicia y del Derecho, consultado el 17/07/2023). Al mismo tiempo, la deforestación por parte de grupos armados, ganaderos y grandes empresas es generalizada en el departamento desde hace varios años. Se estima que el 75% de los bosques han sido destruidos (Semana consultado el 15/07/2023; AA 14/04/2023). Esta interacción ha llevado a la convergencia de una importante militarización, ya sea motivada por la lucha contra grupos armados o por la deforestación, lo que pone a la población rural y campesina en el centro de las disputas (Rodríguez 2020).

Map 3: Caquetá subregions



Source: ACAPS using data from OCHA 04/04/2023; La Nación 01/11/2016

Contexto general

Caquetá, el tercer departamento más grande de Colombia, está situado al sur del país, donde coinciden el sistema montañoso de los Andes y la selva amazónica. Sirve de corredor de tránsito entre la región andina, la Amazonía y los llanos surorientales y limita con los departamentos del Cauca, Guaviare, Huila, Meta y Putumayo. Es tanto una zona de tránsito hacia los departamentos fronterizos con Brasil, Ecuador y Perú como una zona segura para los grupos armados debido a sus zonas montañosas y selváticas. Estas condiciones, sumadas a la débil presencia estatal, la fuerte militarización y las precarias condiciones económicas, han contribuido a que el conflicto armado afecte al departamento desde hace varias décadas (CNMH et al. 2013; CNMH 08/2017; Diario de Paz 25/03/2023).

Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, Caquetá fue uno de los primeros departamentos del país que acogió a grupos disidentes de las FARC-EP. La mayoría de estos grupos provienen de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC-EP, que tuvo presencia histórica en las zonas montañosas del departamento (Defensoría del Pueblo de Colombia 04/01/2019; Defensoría del Pueblo de Colombia 03/07/2020). En julio de 2023, había dos grupos armados principales en el departamento: Los Comandos de la Frontera (adscrito a la Segunda Marquetalia) y el Frente Carolina Ramírez (adscrito al EMC).

Entre 2019-2020, la Defensoría del Pueblo de Colombia afirmó que los grupos disidentes de las FARC-EP presentes en Caquetá se distribuyeron el territorio entre ellos, evitando confrontaciones (Defensoría del Pueblo de Colombia 04/01/2019; Defensoría del Pueblo de Colombia 03/07/2020). Esto cambió a finales de 2020, cuando el Frente Carolina Ramírez entró en disputa por el control territorial de los municipios de Cartagena del Chairá, Curillo, El Paujil, La Montañita, San José del Fragua, Solano, y Solita (Defensoría del Pueblo de Colombia 07/01/2021; Defensoría del Pueblo de Colombia 02/05/2022).

Principales causantes de la crisis y desarrollos recientes

Recientes disputas entre ambos grupos armados: Los Comandos de Frontera tienen el control territorial de la mayor parte del Caquetá, pero en mayo de 2023, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el ingreso del Frente Carolina Ramírez a San Vicente del Caguán. Este grupo puede extenderse a El Doncello, El Paujil, La Montañita y Puerto Rico (Defensoría del Pueblo de Colombia 18/05/2023). Desde mayo de 2023, se han producido cuatro combates entre grupos armados no estatales en Caquetá, todos ellos en el norte del departamento. El 1 de mayo, el EMC y la Segunda Marquetalia se enfrentaron en Florencia (capital del departamento). El 13 de mayo, los dos grupos volvieron a enfrentarse en San Vicente del Caguán y, posteriormente, el 27 de mayo, en la zona rural de Puerto Rico (OCHA, consultado el 03/07/2023). En julio hubo otro combate en la frontera con el departamento del Putumayo (Infobae 20/07/2023).

Estigmatización y violencia selectiva contra la población civil: además de combatir, los grupos armados ejercen violencia selectiva contra quienes consideran aliados de sus rivales para regular la vida de la comunidad. Según testimonios de la población, los grupos armados han establecido un toque de queda a las 19:00 en el departamento. También han prohibido las camisas negras e instalado vallas de propaganda en distintos pueblos. Incluso han obligado a la gente a participar en un censo para recopilar información (Cerosetenta 02/05/2023).

Ataques contra funcionarios públicos

El alcalde de Cartagena del Chairá afirma que el EMC le ha amenazado de muerte. Como consecuencia, el EMC le prohibió la entrada al municipio que preside, obligándolo a gobernar desde Florencia (Infobae 21/05/2023). En el departamento, los grupos armados extorsionan a los candidatos a cargos públicos a cambio de permiso para hacer campaña (El País 29/05/2023). El gobernador del Caquetá ha manifestado que cuando se moviliza tiene que establecer amplios dispositivos de seguridad y hay algunos pueblos que no puede visitar (EE 29/05/2023). Los habitantes del Caquetá dicen que viven en un clima de inseguridad y temor debido a estos niveles de violencia y a los sistemas de gobernabilidad de los grupos armados, sumado a la débil capacidad de respuesta del Estado (Cerosetenta 02/05/2023).

Deforestación y estigmatización de los agricultores

Caquetá es uno de los departamentos donde la deforestación empezó a aumentar tras la desmovilización de las FARC-EP (ICG 04/11/2021). Como respuesta, hay una creciente presencia militar en el departamento que pretende detener el fenómeno. La presencia del ejército para combatir la deforestación ha aumentado las tensiones con la población local, y las fuerzas estatales han estigmatizado a muchos agricultores como deforestadores, lo que ha dado lugar a más acciones represivas (Ala Orilla del Rio 03/05/2019; Mongabay 11/06/2023). Estas tensiones, unidas a la estigmatización de la población local como colaboradora de los grupos armados, han provocado capturas, daños a la propiedad privada y el asesinato de civiles (Corredor-García and Vega 15/06/2023; FIP 25/08/2022). Esto ayuda a explicar las radicales reacciones de los civiles en el departamento. Por ejemplo, a principios de marzo, una comunidad de San Vicente del Caguán retuvo a 76 policías durante una protesta en la que resultaron heridas 40 personas y murieron un policía y un campesino (La FM 03/03/2023; EE 06/03/2023).

Impacto humanitario

Los ataques contra la población civil fueron frecuentes en Caquetá durante el primer semestre de 2023. Entre los 75 sucesos de violencia que OCHA identificó en Caquetá relacionados con el conflicto armado, 59 fueron ataques contra la población civil. De ellos, 27 fueron asesinatos de civiles y 18 amenazas individuales o colectivas (OCHA, consultado el 03/07/2023). Esto concuerda con el hecho de que los grupos armados atacan a las personas que consideran colaboradoras o miembros de grupos rivales. Los particularmente afectados son los excombatientes de las FARC-EP que viven en Caquetá, a quienes ambos grupos (EMC y Segunda Marquetalia) han estigmatizado. Los líderes sociales, indígenas y campesinos también se enfrentan a la estigmatización. Los grupos armados suelen instrumentalizar a estas poblaciones para que les proporcionen información o bienes, o para que participen en sus actividades. Esto genera un ambiente de estigmatización en el que, en tiempos de rivalidad entre grupos armados, estas personas se enfrentan a las consecuencias de ser consideradas cercanas o colaboradoras de uno de los bandos (Defensoría del Pueblo de Colombia 18/05/2023; OCHA consultado el 03/07/2023).

El reclutamiento forzoso y el uso de niños y adolescentes en la guerra también se han observado en Caquetá. Al igual que en el Chocó, la Defensoría del Pueblo ha advertido que esta población es particularmente vulnerable a ser utilizada por grupos armados, que les ofrecen dinero a cambio de unirse o se los llevan por la fuerza (Defensoría del Pueblo de Colombia 18/05/2023). De hecho, el Gobierno colombiano suspendió el proceso de negociación con el EMC después de que el grupo matara a cuatro menores reclutados a la fuerza que intentaron escapar (Infobae 22/05/2023; EE 22/05/2023). No es posible determinar con exactitud el número de niños reclutados forzosamente, ya que la falta de confianza en las autoridades o el temor a represalias contra los menores o sus familias han ocasionado un subregistro generalizado (Defensoría del Pueblo de Colombia 18/05/2023; EE 22/05/2023).

Las restricciones a la libertad de circulación están muy extendidas. Para demostrar su capacidad de control, los grupos armados elaboran manuales de convivencia e imponen restricciones de movilidad a la población local (Cerosetenta 02/05/2023). Durante los últimos seis meses de 2022, la OCHA reportó varios desplazamientos forzosos que se produjeron para evitar estas acciones de control social. Las poblaciones también han reportado restricciones de movilidad en las zonas rurales, lo que limita su capacidad para acceder a sus medios de subsistencia (OCHA 19/06/2023). El EMC ha llegado a exigir carnés de identidad para entrar o salir de determinados municipios (Semana 22/06/2023).

Las limitaciones al acceso humanitario se deben a los enfrentamientos paralelos entre grupos armados en ciertas zonas y a las muestras de control social en otras, lo que limita la capacidad de proporcionar ayuda humanitaria. Entre enero y junio de 2023, se registraron al menos dos incidentes de amenazas contra el personal humanitario o sus instalaciones, y una misión médica fue atacada (OCHA, consultado el 03/07/2023).

Las organizaciones encargadas del desminado humanitario han denunciado las restricciones impuestas a sus actividades por los grupos armados (OCHA 19/06/2023). En los municipios de Solano y San Vicente del Caguán se registraron dos sucesos con minas antipersona en 2022. Este tipo de sucesos no se registraban en estas zonas desde 2019. Durante los seis primeros meses de 2023 se registraron cinco accidentes con artefactos explosivos en Cartagena del Chairá, La Montañita y Puerto Rico (OCHA consultada el 03/07/2023).

Al mismo tiempo, las comunidades han dejado de denunciar sucesos de violencia, como confinamientos o desplazamientos, por miedo a ser castigadas por los grupos armados (OCHA 19/06/2023). En mayo de 2023, el EMC desconectó al menos ocho antenas de comunicación en Cartagena del Chairá, dejando a unas 30 000 personas sin servicios de internet o teléfono durante varios días (RCN 03/05/2023; Caracol Radio 08/05/2023). El subregistro en varios ámbitos hace que la información disponible sobre las repercusiones humanitarias de la violencia no sea fiable.

Perspectivas

Expansión del EMC en Caquetá incentivada por la negociación de paz:

la competencia entre el EMC (Frente Carolina Ramírez) y la Segunda Marquetalia (Comandos de Frontera) en Caquetá se ha agudizado desde mayo de 2023, mes durante el cual se presentaron tres enfrentamientos en el departamento entre los dos grupos armados (Verdad Abierta 25/05/2023). Las negociaciones del Gobierno colombiano con el EMC pueden contribuir a agravar este enfrentamiento por dos razones.

En primer lugar, el EMC tiene incentivos para expandirse, derrotar a su rival y afirmar ante el Gobierno que son la organización post-FARC-EP más legítima a tener en cuenta en las negociaciones (Ciro 02/06/2023). Dado que el EMC agrupa a varios disidentes, le ha costado demostrar que es una organización estructurada y unificada (Razón Pública 26/03/2023; NÚCLEO 05/06/2023). El grupo puede expandirse y demostrar su capacidad para derrotar a un grupo que reclama el dominio histórico en Caquetá para reafirmar su poder de control territorial y presionar para que haya negociaciones con el Gobierno colombiano. Esto les da incentivos para continuar su guerra con la Segunda Marquetalia.

En segundo lugar, el Gobierno colombiano ha definido dos tipos de organizaciones armadas en Colombia: políticas y criminales (Badillo y Trejos 28/03/2023). En la práctica, esto ha llevado a los grupos armados a aumentar las muestras de control social para demostrar que no sólo persiguen rentas ilegales, sino que también tienen legitimidad entre la población local (Ciro 02/06/2023). Esto puede explicar por qué la llegada del EMC ha estado acompañada de órdenes de controlar a la población civil, con la intención de demostrar que son una

organización política y que merecen un proceso de paz en lugar de un mero proceso de sometimiento. Esto les da un incentivo para aumentar sus muestras de control social.

Las zonas que se anticipa que se verán más afectadas por la expansión del EMC son la cordillera norte del Caquetá, donde tiene su principal área de control territorial y que conecta el departamento con el Huila, y las riberas del río Caquetá en la frontera con el departamento del Putumayo (OCHA 19/06/2023).

Aumento de la violencia por falta de coordinación del EMC:

Aunque avancen las negociaciones de paz y se reanude el cese al fuego con el EMC, no es claro si este grupo armado es capaz de controlar a sus tropas para detener las acciones violentas (VOZ Digital Youtube 16/03/2023). A pesar de que el EMC se autodenomina como la continuación de las FARC-EP, muchos de sus miembros son nuevos reclutas (Razon Publica 26/03/2023). Al mismo tiempo, aunque el grupo se presenta como una organización con una cadena de mando clara, sus operadores locales parecen tener capacidad para tomar decisiones de forma autónoma (CORE 05/06/2023). El asesinato de los cuatro menores que intentaban huir del reclutamiento, que provocó la suspensión del cese al fuego, demuestra que no todas las decisiones tomadas por los principales mandos del EMC se adoptan necesariamente a nivel local (El País 25/05/2023).

Aumento de la violencia de los grupos armados hacia el Estado: además de luchar contra sus rivales, los grupos armados pueden llevar a cabo ataques contra el ejército para demostrar su capacidad operativa y presionar para que haya negociaciones (El País 25/06/2023). El aumento de la actividad de los grupos armados contra las fuerzas de seguridad colombianas podría ocasionar un incremento de los combates; en otras zonas del país, esto ha provocado desplazamientos forzados y el confinamiento de comunidades (El Tiempo 17/08/2022). Dado que gran parte de la población rural depende de las actividades agrícolas, los combates, el confinamiento y los desplazamientos pueden limitar el acceso a las tierras de labranza y perturbar muchos medios de subsistencia (NRC 26/06/2023; ACAPS 18/02/2022).

Mayor estigmatización de los civiles como colaboradores de grupos rivales: el esfuerzo activo de la Segunda Marquetalia y el EMC por aumentar su base social y obligar a la comunidad a colaborar con sus causas aumenta el riesgo de que los grupos rivales y las fuerzas de seguridad colombianas estigmaticen a los civiles como aliados de sus oponentes. Esto puede provocar asesinatos, desplazamientos, daños materiales o amenazas contra la población civil, como ha ocurrido en los últimos meses.

CRISIS A TENER EN CUENTA 3: CHOCÓ

Principales hallazgos

Chocó tiene una gran población rural que depende de las actividades agrícolas. Gran parte de su población se identifica como **afrocolombiana o indígena**. Este departamento también tiene altos niveles de **inseguridad alimentaria y pobreza**, que aumentan el impacto de la violencia armada en la población. Por su situación geográfica, Chocó es también un objetivo estratégico para el tráfico de personas, la minería ilegal y el contrabando de migrantes.

Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, **la mayoría del norte del Chocó quedó bajo la influencia de las AGC y el sur, bajo la del ELN**. Esta configuración cambió en 2020, cuando las AGC comenzaron a expandirse hacia el sur del departamento.

Los **principales impactos humanitarios** de la violencia en el Chocó son el **desplazamiento y el aumento del reclutamiento forzado de civiles** como consecuencia de los combates entre las AGC y el ELN en varios municipios del sur. El ELN también ha aumentado de modo estratégico el uso de **confinamientos** para impedir los avances de las AGC y, más concretamente, vigilar a los civiles en sus zonas de influencia. Desde 2022 hasta junio de 2023, el Chocó tuvo la mayor cantidad de víctimas de confinamiento entre todos los departamentos de Colombia. El conflicto armado tiene un fuerte impacto en los niños, en particular por el reclutamiento forzoso y los problemas de salud mental, que también aumentan las tasas de suicidio entre los menores.

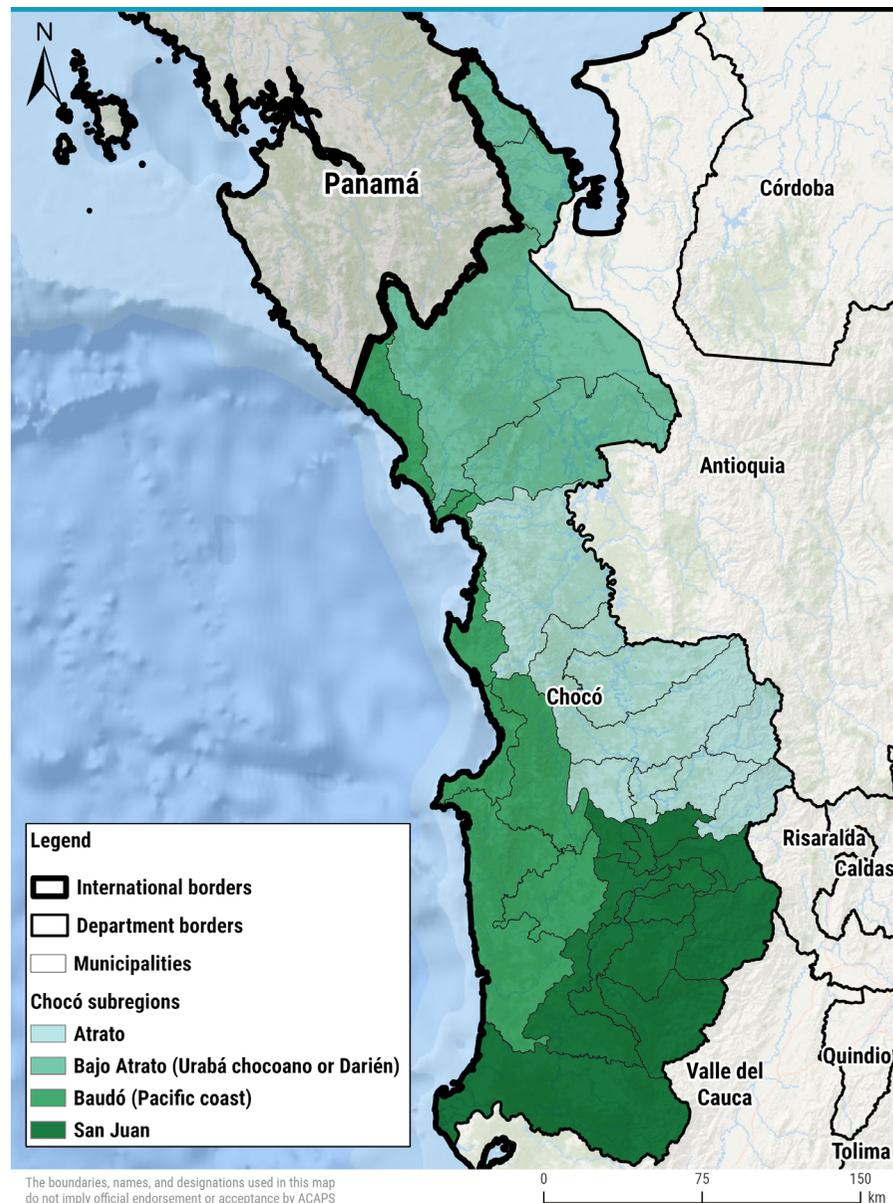
Durante los próximos seis meses (julio-diciembre de 2023), es probable que se produzcan más enfrentamientos entre los dos grupos armados y que aumenten las restricciones a la movilidad en el sur del Chocó. Los confinamientos y desplazamientos perturban los **medios de subsistencia de una población que ya vive con altos niveles de inseguridad alimentaria y pobreza**. Las próximas elecciones también pueden aumentar los riesgos de protección para quienes muestren preferencias electorales que los grupos armados perciban como traición y, además, para la población civil que votará en las elecciones.

Información básica

INDICADOR	CHOCÓ	COLOMBIA
Población	557 654	51,52 millones
% de la población que vive en zonas rurales	56,66%	23%
Cobertura eléctrica rural	72,25%	86%
Cobertura de agua potable rural	56,10%	37%
Alcantarillado rural	52,95%	16%
Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos	38,4	15,02
Tasa de extorsión por 100 000 habitantes	13,03	9,5
Tasa de homicidios en zonas rurales por 100 000 habitantes	34,14	36
Origen étnico	Indígena: 61 300 (11,4%) Población negra y afrocolombiana: 407 000 (73,6%)	Indígena: 1 905 617 (4,4%) Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera: 2 937 224 (6,76%)
Pobreza en las zonas rurales	45,8%	39,9%
% de personas que viven de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca	29,13%	21,92%
% de la población que sufre inseguridad alimentaria	45%	30%
Desempleo	12,5	10,5%

Fuentes: DANE (12/07/2019, 12/2020, 05/04/2023 y 05/2023); TerriData (consultado el 10/07/2023); CTPA et al (consultado el 10/07/2023); PMA (15/02/2023); Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (consultado el 10/07/2023); LR (10/03/2023); Gobierno de Colombia (12/2021); Dejusticia (28/02/2023); Medicina Legal (2022); Contraloría General de la República (consultado el 19/07/2023); Así Vamos en Salud (consultado el 17/07/2023)

Map 4: Chocó subregions



Source: ACAPS using data from OCHA 04/04/2023; TodaColombia accessed 26/07/2023

El Chocó alberga la población más grande que se identifica como negra o afrocolombiana (más del 73%) e indígena (más del 11%) entre los departamentos del país (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, consultado el 10/07/2023). También es uno de los departamentos con mayor población rural, ya que más de la mitad de sus habitantes viven en zonas rurales. Poco más de la mitad de la población rural tiene acceso a agua potable y alcantarillado (TerriData consultado el 10/07/2023). Cerca del 30% de la población del departamento depende de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca (DANE 12/2020). También es uno de los departamentos con mayor inseguridad alimentaria, que afecta a casi el 45% de la población (PMA 15/02/2023).

Estas condiciones ocasionan un ciclo de hechos producto del conflicto armado y crisis preexistentes que se agravan uno al otro. El desplazamiento y el confinamiento suelen afectar a una población que ya vive en la pobreza y que vive sobre todo de la agricultura de subsistencia (ACAPS 22/12/2021; GPC 12/2021).

Del mismo modo, la gran presencia de población negra e indígena en el departamento los ha convertido en objetivo de los grupos armados, ya que a menudo habitan territorios estratégicamente situados para que los grupos armados lleven a cabo actividades ilegales. En 2022, la población indígena representaba el 66% del total de personas afectadas por confinamiento en el Chocó y la población negra o afrodescendiente el 34% (GPC 12/2021). Las poblaciones indígenas son objeto recurrente de confinamiento, ya que a menudo se niegan a desplazarse porque consideran fundamental proteger su territorio (UNHCR 07/2009). A lo largo de la historia, la población negra y afrodescendiente ha sobrevivido de la minería tradicional e informal, un mercado que los grupos armados también intentan controlar. Esto somete a la población de sus territorios a la violencia (FLM 18/07/2016; ICG 24/02/2023).

Contexto general

El departamento del Chocó está situado en el noreste de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe y Panamá, al este con el océano Pacífico y el departamento de Antioquia, y al sur con el departamento del Valle del Cauca. Todas sus conexiones entre los cultivos de coca y las zonas de exportación, así como la actividad minera y sus zonas fronterizas con Panamá, hacen del Chocó un departamento estratégico para el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes (Ministerio de Justicia y del Derecho 11/2021; InSight Crime 09/05/2019). En 2019, el Chocó representó aproximadamente el 43% del total de la minería ilícita de oro en toda Colombia (GFI et al. 10/02/2021).

Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, el sur del departamento del Chocó (en especial las subregiones de San Juan y Alto Atrato) permaneció en gran medida bajo el control del ELN (ACAPS 22/12/2021).

En el norte (en especial la subregión del Bajo Atrato, también conocida como Urabá Chocoano), las AGC han obtenido el control al derrotar a otros grupos armados, como el FVPA (también conocido como Los Caparros) y el ELN (ACAPS 22/12/2021).

En el centro del departamento (específicamente en las subregiones Baudó-Litoral y Medio Atrato), algunos territorios permanecen en disputa entre el ELN y las AGC (ACAPS 22/12/2021).

Principales causantes de la crisis y desarrollos recientes

Expansión de las AGC hacia el sur del departamento:

La distribución de los grupos armados en el Chocó cambió en 2020 cuando las AGC empezaron a expandirse hacia el sur del departamento. En particular, las AGC desafiaron al ELN en Bajo Atrato, Baudó, Medio Atrato y la Costa Pacífica (Defensoría del Pueblo de Colombia 18/02/2022; ACAPS 22/12/2021). En 2022, las AGC se expandieron a los municipios de Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Medio Baudó, Nuquí y Sipí (Defensoría del Pueblo de Colombia 15/07/2022, 01/06/2023 y 26/12/2022). En 2023, los enfrentamientos entre las AGC y el ELN han aumentado en Río Iró (Defensoría del Pueblo de Colombia 29/05/2023). En Istmina, Nóvita y Sipí también se han presentado enfrentamientos entre los dos grupos armados (Semana 07/06/2023).

Muestras de control territorial del ELN en el sur del departamento:

En las zonas controladas por el ELN en el sur del Chocó, el grupo ha estado realizando demostraciones de control territorial. En febrero y mayo de 2023, declararon dos paros armados de hasta nueve días de duración, que afectaron principalmente a los municipios de Nóvita y Sipí (LSV 23/02/2023; Defensoría del Pueblo de Colombia 04/06/2023). El principal motivo de estos paros armados era detener el avance de las AGC hacia el sur y controlar con mayor facilidad los movimientos de los ciudadanos (Vorágine 11/06/2023).

El 3 de julio, el ELN declaró un nuevo paro armado que comenzaría el 4 de julio en la subregión de San Juan. Una de las razones aducidas en la declaración fue la expansión de las AGC a la subregión (LSV 03/07/2023). La huelga armada duró diez días, hasta el 13 de julio (El Tiempo 13/07/2023).

Enfrentamientos entre el ELN, las AGC y las fuerzas de seguridad colombianas:

También se han producido otro tipo de enfrentamientos, como entre las AGC y el ejército colombiano en mayo, y entre el ELN y el ejército en varias ocasiones, incluidos varios combates en marzo (Semana 15/05/2023). Esto ha creado tensiones con las comunidades, que consideran que se corre el riesgo de que la llegada de las fuerzas de seguridad agrave los

enfrentamientos (Infobae 24/06/2023; Caracol Radio 24/06/2023). El ELN ha acusado al ejército de estar aliado con las AGC, creando tensiones en las zonas donde el ELN tiene el control territorial cuando llegan las fuerzas de seguridad (LSV 23/02/2023).

Impactos humanitarios

Confinamientos

En el Chocó ocurrió el mayor número de confinamientos durante los primeros seis meses de 2023, con 15 587 de su población confinada (57% del total en el país) (OCHA consultado el 01/07/2023). Estos sucesos son el resultado de órdenes directas de grupos armados, así como el resultado indirecto de enfrentamientos entre estos grupos.

- A finales de mayo, a causa de los combates entre el ELN y las AGC en el sur del Chocó, unas 1500 personas fueron desplazadas y un número indeterminado de familias confinadas. La razón que las familias reportaron para el confinamiento fue la falta de recursos económicos para salir del territorio o el temor a que los grupos armados tomaran represalias en su contra por huir (El Colombiano 28/05/2023; RNC 26/05/2023).
- Las amenazas de grupos armados que sospechan que apoyan a un rival resultan en el confinamiento de las comunidades. En Nóvita, esto se ha traducido en el confinamiento de unas 3700 personas de la comunidad de Tigre Montería después de que un grupo armado acusara a un civil de ser informante de un grupo armado rival. Los miembros de la comunidad reportaron que el motivo del confinamiento era el miedo a ser atacados (OCHA, consultado el 01/07/2023).
- Las comunidades del Chocó también se han visto confinadas después de que los grupos armados declararan paros armados. En Nóvita, alrededor de 5000 personas fueron confinadas durante casi diez días a partir del 27 de mayo después de que el ELN declarara un paro armado (Asuntos Legales 05/06/2023). En Nóvita y en Sipí, al menos 1300 personas también fueron confinadas como resultado de una orden del ELN en febrero (Defensoría del Pueblo de Colombia 28/02/2023).

Los confinamientos limitan prácticamente todos los transportes terrestres y fluviales, ya que los grupos armados castigan a todos los que deciden salir, imponiendo a su vez restricciones al acceso humanitario y a la capacidad de las poblaciones para desplazarse en busca de ayuda (ACAPS 18/02/2022). Durante los confinamientos, las poblaciones han reportado la pérdida de sus medios de subsistencia (ya que no pueden dedicarse a actividades comerciales ni cultivar sus tierras), problemas de salud sin acceso a atención médica y escasez de alimentos (Defensoría del Pueblo de Colombia 04/06/2023; CICR 22/03/2023; NRC 26/06/2023).

Desplazamiento

El Chocó tuvo el tercer mayor número de desplazados (2071 de un total de 26 000 desplazados) entre los departamentos del país entre enero y junio de 2023 (OCHA consultado el 01/07/2023). Los desplazamientos en 2023 se han debido principalmente a los combates entre grupos armados. Durante los combates, los civiles se desplazan lejos de sus hogares en grandes grupos para evitar enfrentarse a los ataques de los grupos armados (Red+ 19/06/2023).

Los civiles también se desplazan por amenazas o ataques contra ellos mismos o contra miembros de sus comunidades. En estos casos, las personas se desplazan de manera individual, pues la violencia que motiva su movimiento suele ser más selectiva (El Colombiano 07/04/2023; CNMH 07/10/2015).

Otros civiles optan por desplazarse para evitar el confinamiento durante los ataques armados. Los grupos armados suelen anunciar los ataques armados unos días antes de que inicien. Algunos civiles deciden abandonar la zona antes de que el anuncio surta efecto. Por ejemplo, a partir del 25 de mayo, cuando el ELN anunció el inicio de un paro armado el 27 de mayo, por lo menos 1600 personas fueron desplazadas de Sipí a Istmina (El Colombiano 28/05/2023).

Reclutamiento forzoso

Además del desplazamiento y el confinamiento, el aumento de la competencia entre grupos armados también implica mayores riesgos de reclutamiento forzoso. A medida que los grupos armados amplían su presencia territorial (como es el caso de las AGC) o luchan por no perder el control de territorios (como es el caso del ELN), deben aumentar sus tropas. No se dispone de datos fiables que den cuenta de las tendencias de reclutamiento. Dicho esto, organizaciones gubernamentales y comunidades locales han denunciado un aumento del reclutamiento forzado y del uso de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados (Defensoría del Pueblo de Colombia 29/05/2023 y 03/04/2023).

Aumento de suicidios

La Defensoría del Pueblo ha reportado un aumento de suicidios entre los jóvenes indígenas del Chocó, en parte explicado como una forma de evitar el reclutamiento y por las consecuencias que el conflicto armado ha tenido en la salud mental (EE 31/07/2021). Según algunas estimaciones, entre 2019-2022, alrededor de 50 niños en el Chocó se suicidaron después de que los grupos armados amenazaran con reclutarlos a la fuerza (EE 08/05/2022). Sólo entre enero y mayo de 2023, cerca de 15 suicidios en el Chocó estuvieron relacionados con el conflicto armado (EE 11/05/2023).

Perspectivas

Aumento de los combates militares como consecuencia de la expansión de las AGC en el sur del Chocó:

El conflicto entre las AGC y el ELN parece estar lejos de terminar. El 3 de julio, un combate en Sipí entre el ELN y las AGC duró más de tres horas, y causó la muerte de un civil y heridas a otro (RNC 03/07/2023). Como resultado de estas tensiones, el ELN declaró un paro armado que comenzó el 4 de julio (EE 04/07/2023).

Si el conflicto entre las AGC y el ELN persiste en los próximos meses, podrían aumentar los combates militares, ya que es la manera como las AGC históricamente han intentado ganarle la partida al ELN. Los enfrentamientos pueden aumentar el número de desplazados (TeleMedellín 25/03/2023). Además de necesitar refugio, los desplazados en Colombia suelen denunciar la falta de alimentos suficientes y la pérdida prolongada de sus medios de subsistencia, ya que no pueden regresar al territorio (FSC/Clúster de Nutrición 17/10/2022).

Aumento de los confinamientos como forma del ELN de retrasar el avance de las AGC:

El ELN parece estar evitando activamente los combates con las AGC y, en su lugar, está reforzando los confinamientos. Estos confinamientos ayudan a impedir el avance de los grupos armados rivales al aumentar la vigilancia de las zonas por las que se desplazan. Durante los últimos seis meses de 2022, se produjeron al menos 20 combates entre grupos armados no estatales en Chocó. Durante los seis primeros meses de 2023, sólo hubo 12. Por el contrario, los confinamientos aumentaron, con 15 500 personas confinadas en el Chocó entre enero y junio de 2023 en comparación con aproximadamente 13 450 entre julio y diciembre de 2022 (OCHA consultado el 15/06/2023; OCHA accedió el 19/07/2023). El ELN parece estar recurriendo a más golpes armados para controlar el avance de las AGC en el sur del departamento.

Aumento de la violencia electoral contra líderes sociales, candidatos y votantes que los grupos armados perciben como traidores:

Hasta el 29 de julio, cuando finaliza el proceso de inscripción de candidatos, los grupos armados pueden aumentar la violencia contra las personas que perciben como peligrosas para sus intereses y que quieren inscribirse como candidatos (MOE 27/06/2023; Red+ 19/06/2023). Al mismo tiempo, en el pasado, los grupos armados han asesinado durante las elecciones a líderes sociales que consideraban una amenaza para sus reclamos territoriales (Albarracín et al. 05/09/2022; Albarracín et al. 23/11/2022). En el Chocó, 12 municipios están en alto riesgo de violencia electoral, y ocho se consideran en riesgo extremo (MOE 27/06/2023; Red+ 19/06/2023). Durante y después de las elecciones, los grupos armados también pueden atacar a las comunidades que creen que votarán por candidatos que no coinciden con sus intenciones políticas. Esto puede implicar asesinatos selectivos, pero en el pasado también ha supuesto el desplazamiento masivo de comunidades (Steele 2020). Si las AGC intentan expandirse, el ELN puede tener incentivos para proteger sus territorios de candidatos o votantes que expresen preferencias políticas discrepantes con sus objetivos. Como consecuencia, la violencia electoral podría aumentar en los meses previos a las elecciones de octubre.

PRINCIPALES CAUSAS Y PERSPECTIVAS DE LAS CRISIS EN ANTIOQUIA, CAQUETÁ Y CHOCÓ.

